Consejo Ejecutivo de la ISP EB-157
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2021
Reunión virtual en 2 sesiones
De PSI HO Francia

Punto 2.17: Clima

Objetivo del informe: Actualizar el EB-157

Relacionado con: PdA sección 4.8 y Resolución del Congreso nº 35

Antecedentes: El informe para el EB-156 es un análisis de los temas de la COP26 y sigue siendo relevante.

Debate:

Resultados de la COP26: A pesar de los pronunciamientos de los líderes mundiales[i] sobre la necesidad urgente de actuar, la COP26 de Glasgow no ofreció resultados acordes con las necesidades. El Pacto Climático de Glasgow (en inglés) es largo en palabras y corto en contenido real.

Las dos semanas de negociaciones en la COP26 (que siguen a las reuniones mensuales de múltiples grupos de trabajo a lo largo del año) no han conseguido desbloquear algunos puntos clave: en particular, la financiación del clima, incluidas las pérdidas y los daños y los fondos para la adaptación; las reducciones rápidas y profundas de los combustibles fósiles (incluidas las subvenciones estatales).

La COP 26 se basa en el Acuerdo de París de 2015, que se aprobó solo porque no había objetivos vinculantes.[ii] El núcleo del Acuerdo de París son las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), por las que todos los países presentan planes de reducción de emisiones, normalmente con 2030 como fecha objetivo. Los planes de los países son voluntarios, no vinculantes. Las NDC presentadas actualmente por los países a la ONU supondrán un aumento de la temperatura de más de 2,5ºC para finales de siglo, lo cual es inaceptable. Deben revisarse cada cinco años. La COP26 quiere que esto se cambie a revisiones anuales, como una forma de garantizar una mayor ambición en los planes de los países. Hay que tener en cuenta que muy pocos países implican a los sindicatos en el desarrollo de las NDC.

La financiación del clima es una cuestión fundamental. Los países industrializados, que han hecho crecer su riqueza quemando combustibles fósiles, siguen negándose a pagar a los fondos climáticos colectivos para ayudar a los países en desarrollo. Aunque las declaraciones de la COP hacen referencia a esto, no existen compromisos ulteriores.

En general, las opciones políticas de la ONU, tanto para los ODS como para el clima, siguen fijándose en el uso de subvenciones públicas para atraer capital privado, pero no está funcionando. Nuestra evaluación es que esto probablemente seguirá el mismo camino que las asociaciones público-privadas (PPP), las iniciativas de financiación privada (PFI) o la Movilización de la Financiación para el Desarrollo (MFD). Estas políticas no consiguen movilizar la financiación privada prometida, dan lugar a más privatizaciones insostenibles y el capital privado que hay se dirige a los países y proyectos con mayor rendimiento de la inversión, y por tanto no a las zonas más necesitadas.

Para la ISP, el trabajo sobre la justicia fiscal y sobre la deuda está directamente relacionado con la crisis climática, ya que los gobiernos necesitan desesperadamente fondos adicionales para invertir en infraestructuras y servicios resilientes. Sin embargo, si los fondos climáticos se utilizan para acelerar la privatización, a la larga estaremos peor. Los gobiernos locales son especialmente susceptibles a las premisas de la financiación privada y las asociaciones público-privadas, ya que tienen un espacio fiscal limitado y una demanda casi ilimitada de infraestructuras y servicios públicos resistentes al clima.

Tenemos que acelerar el abandono de los combustibles fósiles, reduciendo un 7% al año hasta 2030, un objetivo casi inalcanzable. Surgió el nuevo término Net Zero (emisiones netas cero), para dar otro objetivo móvil a la fecha de finalización de los combustibles fósiles, supuestamente en 2050 (aunque India anunció 2070). Dada la historia de las promesas climáticas, muchos consideran que se trata de otra táctica dilatoria. El uso del gas natural como puente de transición para abandonar el carbón no es una solución viable.

En las negociaciones mundiales, debemos comprender el poder del lobby de los combustibles fósiles. En la COP26, tuvieron la mayor delegación (en inglés). También trasladan su poder a las políticas nacionales, bloqueando eficazmente las políticas climáticas necesarias. Sin embargo, están sometidos a una presión cada vez mayor. Por primera vez, el término combustibles fósiles se mencionó en el texto, y el fin del carbón está a la vista. Los inversores están retirando cada vez más sus fondos del carbón, incluidos algunos fondos de pensiones. Y las demandas contra empresas y gobiernos podrían acelerar la transición. Sin embargo, tanto para las empresas como para los países, una enorme proporción de sus activos de combustibles fósiles dejará de tener valor, ya que hay que dejarlos bajo tierra.

La CSI consiguió que la transición justa[iii] pasara del preámbulo del Acuerdo de París al texto completo del Pacto de Glasgow. Sin embargo, el término Transición Justa se utiliza de forma imprecisa, para adaptarse a diversos propósitos, de ahí que algunos digan que está desprovisto de su significado principal. No obstante, la CSI ha conseguido reforzar el perfil de lxs trabajadorxs y de los sindicatos gracias a que, a lo largo de los años, se ha centrado en dos palabras.

En cuanto a la generación de electricidad, la ISP colabora con los Sindicatos por la Democracia Energética (en inglés) y los sindicatos de todo el mundo. Estamos finalizando un análisis detallado de los obstáculos que bloquean el cambio rápido a las energías renovables. El principal problema es que las empresas privadas de energía sólo invierten cuando sus beneficios están garantizados por las subvenciones públicas, y allí donde los beneficios son mayores. [iv]Además, muchos países impiden que los servicios públicos se expandan hacia las energías renovables, incluso bajo las condiciones de los inversores. La principal recomendación de TUED es que los sistemas eléctricos vuelvan a estar en manos públicas. Este proyecto vincula nuestro trabajo sobre Gobiernos Locales y Regionales (GLR), servicios públicos y clima. La investigación se ha plasmado en un Programa sindical para un futuro energético público con baja emisión de Carbono de dos páginas.

La labor de la ISP en materia de migración integra cada vez más los efectos de la crisis climática, ya que es uno de los principales factores que obligan a las personas a abandonar sus hogares, regiones y países. El trabajo sobre GLR también incorpora cada vez más las cuestiones climáticas en la amplia gama de infraestructuras y servicios, incluidos los servicios de emergencia. Los sindicatos de educación piden que el clima se integre en los planes de estudio. Los sindicatos de la salud incluyen la presión del clima para pedir más personal y mejores infraestructuras.

Es necesario establecer un paralelismo político entre la pandemia del COVID-19 y la crisis climática. En cuanto a la financiación de la COVID, los países ricos han gastado 17 trillones de dólares en una combinación de intervenciones públicas. A los países en desarrollo sólo se les ofreció una moratoria en el pago de intereses a las IFI. En cuanto al clima, los países ricos no han cumplido con los 100.000 millones de dólares anuales prometidos, que en comparación con su gasto en COVID es una miseria. Los problemas con las cadenas de suministro globales pusieron de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias industriales nacionales basadas en las necesidades públicas. Algunas instalaciones de fabricación recibieron el mandato de producir los materiales necesarios para la pandemia. Las instalaciones sanitarias y asistenciales privadas fueron asumidas temporalmente por mandatos públicos. Todas estas herramientas, y más aún, son necesarias ahora para hacer frente a la crisis climática.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció, por primera vez, que tener un medio ambiente limpio y saludable es un derecho humano. Esta cuestión se someterá a la consideración de la Asamblea General de la ONU. Hay que tener en cuenta que la ONU debatió, pero nunca adoptó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra de 2010.

Implicaciones presupuestarias: en el presupuesto.

Próximos pasos:

- Proporcionar una evaluación posterior a la COP26 con recomendaciones para nuevas acciones
- Continuar el trabajo energético con la TUED sobre la transición a sistemas públicos de energía con bajas emisiones de carbono
- Apoyar el trabajo de los proyectos sobre el clima
- Reunir y compartir material sobre las desinversiones de los fondos de pensiones
- Reunir y compartir investigaciones sobre las subvenciones a los combustibles fósiles

Se recomienda al EB:

1. ***TOMAR NOTA del informe.***

Documentos relacionados: vea los enlaces insertados en el texto anterior.

---

[i] Desde el EB-156 de mayo de 2021, la crisis climática se acelera. El sexto informe del IPCC no deja lugar a dudas sobre la urgencia. Antes de la COP26, el Secretario General de la ONU, António Guterres, convocó una ALERTA ROJA e instó a los Estados miembros a declarar emergencias climáticas para permitir el espacio legislativo, reglamentario y financiero para los profundos y rápidos cambios necesarios. En la reunión del G20 del 30 de octubre, Guterres dijo que "los líderes del G20, en particular, tienen que cumplir. Ya ha pasado el tiempo de las sutilezas diplomáticas. Si los gobiernos -especialmente los del G20- no se levantan y lideran este esfuerzo, nos dirigimos a un terrible sufrimiento humano... el viejo modelo de desarrollo que quema carbono es una sentencia de muerte para sus economías y para nuestro planeta". Guterres también hizo un llamamiento a lxs jóvenes y a lxs activistas del clima para que continúen con sus movilizaciones. Al final de la COP26, dijo que se había dado un paso de bebé cuando lo que se necesitaba era un salto de gigante y que urgía volver el año que viene con mayores compromisos.
El Papa Francisco dijo que el cambio climático y la pandemia del Covid-19 han puesto de manifiesto nuestra profunda vulnerabilidad y han suscitado numerosas dudas e inquietudes sobre nuestros sistemas económicos y el modo en que organizamos nuestras sociedades. Sin embargo, añadió que toda crisis exige una visión, la capacidad de formular planes y ponerlos rápidamente en marcha, para repensar el futuro del mundo, nuestra casa común, y reevaluar nuestro propósito común.

[ii] A diferencia del Protocolo de Kioto (PK) de 1997, que establecía objetivos vinculantes de reducción de emisiones para los países industrializados (países del Anexo 1). Quizá por su carácter vinculante, el PK sólo consiguió suficientes firmas de países para entrar en vigor en 2005, aunque Estados Unidos nunca lo ratificó. Exigía que los países redujeran las emisiones en un 5% con respecto a los niveles de 1990, y esto a partir del periodo 2008-2012. La segunda ronda, de 2013 a 2020, nunca se promulgó.
Sin embargo, el PK estableció algunos principios que siguen siendo controvertidos, sobre todo el comercio de emisiones entre países, que estableció instrumentos del mercado de carbono que han sido muy criticados tanto por permitir a los países industrializados evitar la reducción de emisiones como por haber dado lugar a abusos por parte de los intereses financieros. El comercio de carbono se considera, en el mejor de los casos, ineficaz, aunque los países en desarrollo lo vean como una oportunidad para recaudar dinero.

[iii] La Transición Justa se refiere a varias políticas que protegerán a lxs trabajadorxs y a las comunidades afectadas negativamente por el paso a sociedades con bajas o nulas emisiones de carbono. Su origen está en la necesidad de garantizar que lxs trabajadorxs y las comunidades de los combustibles fósiles no acaben abandonados por los empresarios y los gobiernos.

[iv] La política energética neoliberal ha dividido las empresas públicas de energía integradas verticalmente en las actividades discretas de generación, transmisión y distribución, y luego ha privatizado las partes más rentables de la generación y la distribución/comercio minorista. Sin embargo, si los países quieren desarrollar las energías renovables, será necesario coordinar y sincronizar las grandes inversiones entre las tres áreas. De ahí la necesidad de reintegrar y volver a la propiedad pública.